

## URUGUAY: CONTINUISMO O RUPTURA DEMOCRÁTICA

*Carlos Fazio*



Después del 25 de noviembre, en Uruguay, las cosas están en su lugar. Un país con cara nueva, se apresta a iniciar una etapa distinta y trascendente. Los dados están echados.

El gobierno de Julio María Sanguinetti, que tomará el poder en marzo de 1985, deberá cumplir con su proclamada intención de reinstaurar un régimen de democracia. Para ello está comprometido por su prédica electoral, por las expectativas globales de la población, así como por la influencia de los apoyos externos recibidos.

Sin embargo, el tránsito hacia la democracia no es fácil. El nuevo gobierno estará jaqueado por la profunda crisis económica y su correlato social, por la persistente vigilancia del aparato militar que aún se mantiene intacto, incrustado en el aparato estatal, y por el cumplimiento de sus compromisos económicos internos y externos.

No hay que hacerse muchas ilusiones. Uruguay, después de dieciséis años de dictaduras civiles y militares (no hay que olvidar que fue con Jorge Pacheco Areco que Uruguay se "latinoamericanizó"), entra ahora en la etapa de las democracias restringidas. Pasteurizadas. Basta mirar alrededor; a sus vecinos más cercanos, Argentina y Brasil. Y aún más allá; existe un nuevo movimiento popular que debe observarse sin miopías. Sin clavar los ojos donde ocurre el fenómeno. Washington sigue pariendo modelos. Y así como hace poco más de un decenio dieron luz verde a las dictaduras militares y el terrorismo de Estado, hoy impulsan salidas que significan regresar a un pasado que muchos creían dirimido.

Se podrá seguir repitiendo que los pueblos son como son, no como los inventamos. Y hay razón en ello. También se sabe que es una engorrosa tarea la de salir de una dictadura. Lo cierto es que en las elecciones de noviembre, el pueblo uruguayo, la mayoritaria clase media uruguaya, prefirió una salida a la española después de muerto Franco: un ritmo moderado de transición. Se optó por la propuesta que ofrecía más seguridad, estabilidad y algún cambio. O sea, se votó por el menor riesgo y aún, por el menor trauma posible.

Por supuesto que debe haber total conciencia de que se trata de una democracia incompleta. Y débil, muy débil. Pero la comunidad uruguaya prefirió consolidar una normalidad democrática restringida, mutilada, antes que proponerse objetivos más radicales. Hay quienes dicen, y tal vez les asista la razón, que siempre será preferible una incompleta democracia civil antes que una com-

pletísima dictadura militar. Es verdad, pero no hay que perder de vista que Uruguay sale por segunda vez en el siglo -la primera fractura a la democracia fue en 1933- de una dictadura, y que, a diferencia de la anterior, puede haber entrado, ahora, en una dinámica desconocida: la era de la argentinización, aquella que combina las democracias débiles con los golpes de Estado. Pero esto todavía está por demostrarse y ojalá no ocurra.

Mientras tanto, habrá que pasar revista a los datos de la realidad.

El Uruguay concreto, el país de siempre, está ahí, esta vez arrasado por el autoritarismo militar y los muchachos de la Escuela de Chicago, con su estela de represión, tortura y muerte, con la proliferación de sus mendigos, con sus seis mil millones de dólares de deuda externa y con el Fondo Monetario Internacional al acecho. Con sus presos políticos, sus miles de exiliados y con su monumental ejército de desempleados.

¿Quién gana en noviembre? Es un lugar común decir que ganó la democracia. Mejor: que se derrotó a la dictadura militar.

Hay que ir despacio. Se llegó a las elecciones dentro de la más grave crisis económica del siglo en Uruguay. Si no se pone fin a la dictadura, no podrían encararse soluciones a la crisis fue, más o menos, el razonamiento predominante. Y se generó así un sentido de urgencia, que a la postre es, será, una de las claves del comportamiento del electorado y que tuvo como corolario lógico la idea de no poner en riesgo el inmediato traspaso del poder a los civiles.

Hay un segundo factor, una temática circunstancial que surgió de la estrategia aceptada para salir de la dictadura: el pacto, el continuismo, el provisorio. Y en esto hay qué de tenerse.

Es ley de estrategia no hacer el juego del adversario. Ni entrar en el terreno por él elegido. Se habla de que triunfó el continuismo económico. Y parece que hay razones para opinar así. Lo cierto es que para la fracción de la burguesía que hegemoniza la conducción del Estado uruguayo, no hubo sorpresa. Julio María Sanguinetti era el candidato del sistema. Y a partir de marzo del 85, Sanguinetti se convertirá en el portavoz e instrumento del continuismo socio-económico.

Todo estuvo rigurosamente controlado. Los militares impusieron las reglas del juego y aseguraron un nada traumático tránsito hacia una democracia tutelada. Fueron derrotados por el pueblo en el plano político, pero se van airosos en el

terreno militar. No tienen ni siquiera a cuestas, unas Malvinas. Los militares uruguayos se están retirando ordenadamente y no en pleno desbande; mantienen organizadas sus fuerzas en el plano ideológico, están cohesionadas en su frente interno. Salvaron su impunidad como cuerpo y mantuvieron intacto el sistema del poder represivo. Abandonarán parcialmente el gobierno, pero sostendrán en sus manos las riendas del poder real, dispuesta a intervenir violentamente cada vez que lo consideren necesario.

En agosto de 1984, en las negociaciones del Club Naval entre los mandos castrenses y los tres partidos acuerdistas: el Colorado, la minúscula Unión Cívica y el Frente Amplio, los militares fijaron los límites de la transición. Wilson Ferreira, detenido, y Liber Seregni, los máximos dirigentes del Partido Nacional y del Frente Amplio, respectivamente, seguirían proscritos en materia electoral. Además las Fuerzas Armadas lograron imponer el acto institucional 19, que prevé un nuevo "estado de insurrección" y el juzgamiento de los civiles por la justicia militar, la autonomía de los mandos, y preserva la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional como ideología oficial del Ejército, la Marina y la Aviación, contenida en sus cartas orgánicas desde 1974.

Impusieron también otras dos condiciones: no habría revisionismo de los excesos cometidos por los militares durante el terrorismo de Estado, ni una amnistía general e irrestricta. La intención de la cúpula Castrense fue mantener a los "rehenes" tumpamaros (Raúl Sendic y sus ocho compañeros dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional, en prisión desde 1972) en calidad de "seguro", ante un "posible resurgimiento" de la guerrilla.

En esto no hubo engaño: la fórmula oficialista Sanguinetti-Tarigo adelantó esas posiciones. Y respecto al revisionismo, la confirmó después de los comicios. El Vicepresidente electo, Enrique Tarigo, descartó que el nuevo gobierno fuera a hacer alfonsinismo. O sea, pretende juzgar a los responsables de la represión. Anunció categóricamente que en Uruguay no se va a instalar ningún "tribunal de Nuremberg" para juzgar los crímenes de la dictadura militar. ¿Argumento? "Porque existe el riesgo de un golpe de Estado". Así, con la excusa del golpe, no habrá ni Nuremberg, ni comisión Sábato ni nada que se les parezca en Uruguay. Por lo menos, eso es lo que surge desde la óptica de los gobernantes electos. Habrá que ver si el pueblo

logra imponer su criterio y modificar el de los nuevos gobernantes. Es obvio, pues, que en un inicio, la democracia uruguaya, en su nueva fase, nace maniatada.

En el tema de la amnistía para la guerrilla han habido modificaciones. Antes e inmediatamente después de los comicios, Sanguinetti se manifestó contrario a una amnistía general e irrestricta, como la que propugnaban el Partido Nacional y el Frente Amplio. Sanguinetti trazó una línea divisoria en 1973, y dijo: quienes fueron detenidos antes del golpe de Estado, lucharon contra un "gobierno democrático" y son responsables de atentar contra las instituciones y el estilo uruguayo de vida. A los que cayeron presos después de 1973 sí los considera prisioneros políticos y para ellos habrá una amnistía "generosa". Olvida que la dictadura comenzó en 1968, con Pacheco Areco, y que la mayoría de los tupamaros detenidos —quedan aún unos 500 en prisión— llevan doce años encarcelados y fueron permanentemente sometidos a torturas físicas y psíquicas en todo ese tiempo.

Ahora, a fines de enero de 1985, la movilización popular por la amnistía ha ido modificando la visión del oficialismo electo. Tarigo afirmó que todos los presos políticos serán liberados en los primeros días del nuevo gobierno, en marzo. Permanece sin definición el instrumento jurídico-personal mediante cuya sanción se consumirán tales libertades. El partido Colorado, había propuesto que se ajustara cada medida a los casos particulares, a los que se aplicaría la amnistía, la gracia y el indulto, según la naturaleza del delito que originalmente le fuera atribuido a cada inculcado por la justicia militar. Esta tesis parece ser la que continúa prevaleciendo. Resulta claro que no es lo mismo aplicar una amnistía general que indultos particularizados, que no obstante acortan la pena, no extinguen el delito ni borran sus efectos ni suprimen los antecedentes procesales.

No obstante, el anuncio de Tarigo, confirmado por Sanguinetti cuando dijo a Victoriano Sendic, hermano del jefe tupamaro, que no habría presos políticos en el próximo invierno (el invierno austral comienza en junio), resulta significativo por cuanto abandona otra de las posturas previas de los gobernantes electos, que rechazaba la simultaneidad de las liberaciones y sometía cada caso a un estudio particular, que podría terminar en la liberación o no de cada preso.

Sabido es que una amnistía general e irrestricta impulsada en el Parlamento, con mayorías

que aunaran el Partido Nacional y el Frente Amplio, no es seguro que consiguiera salir adelante. Primero, porque no está claro que consigan el número de votos necesarios, por cuanto en el Partido Nacional, los sectores de Lacalle y Dardo Ortiz votarían con los colorados. Pero aún en caso de prosperar, moriría en el veto del Ejecutivo porque el Parlamento carecería de las tres quintas partes de votos necesarios para su levantamiento.

Los acuerdos del Club Naval revelan, también, que los militares supieron manejar hábilmente la coyuntura electoral. La dictadura provocó las fisuras entre las fuerzas de oposición, en el momento en que éstas debían actuar más unidas. Los primeros análisis del pacto, desde las filas del Frente Amplio, parecen apuntar hacia ciertos desajustes. Se cuestiona si hubo una justa evaluación sobre el momento del inicio del diálogo con los militares (el Partido Nacional permaneció al margen de las negociaciones), de la fortaleza de las fuerzas frenteamplistas para iniciar un diálogo de tal tipo y aún de las metas alcanzables. En principio, la estrategia del Frente de llevar adelante las negociaciones sin denunciar públicamente las desinteligencias con sus interlocutores (particularmente los militares y los colorados), hizo que el ahora partido vencedor no pagara ningún costo político por sus posiciones conservadoras o anti-populares.

Concretamente, el Frente Amplio renunció a explotar electoralmente la situación, mientras que su máximo adversario en Montevideo, el Partido Colorado finalmente vencedor por menos de 20,000 votos, utilizó ideas anticomunistas y antiviolentistas (la violencia de izquierda, por supuesto) con una machacona campaña de publicidad en gran escala, de inconfundible origen norteamericano, y con el casi total monopolio de la prensa escrita, radial y televisiva. En su discurso de cierre de campaña Sanguinetti centró su alocución en el tema de la necesidad de unirse por la democracia, tan amenazada por el militarismo como por "el fantasma del totalitarismo", con el objetivo de restar fuerzas al Frente. Y en definitiva ganó la "mala memoria". Claro que no es para nada despreciable el dato de cómo votaron las Fuerzas Armadas (en Uruguay los militares sufragán): fueron 70 mil votos, de los cuales un 60 por ciento se dirigieron a Pacheco Areco, en el Partido Colorado, por "órdenes superiores". Entiéndase: de los mandos castrenses. Y así, por el particular sistema electoral uruguayo, el Partido Colorado ganó las elecciones, sin crecer porcentualmente respecto a 1971,

porque su amplio espectro le permitió albergar, bajo un mismo lema, a las corrientes renovadoras (las menos), moderadas, conservadoras y al fascismo.

Viejo funcionario al servicio de la oligarquía y del imperialismo, exministro de los gobiernos dictatoriales de Pacheco Areco y Bordaberry, redactor de un proyecto fascista sobre la enseñanza, Sanguinetti tiene un curriculum capaz de agradar a los militares, a la burguesía nativa, al Departamento de Estado norteamericano y a las transnacionales.

Electo presidente, dijo: la ciudadanía "votó al cambio sensato", por un gobierno "serio y responsable". En la campaña, hizo alarde de haber permanecido en Uruguay, "once años combatiendo al gobierno de facto". Pero, curiosamente, ninguno de los presos políticos (en su momento llegaron a ser 8, 000), de los asesinatos en la tortura, de los detenidos-desaparecidos, ni de los exiliados políticos, pertenecen a su partido, el Colorado. Sanguinetti ni siquiera tiene la experiencia de haber pasado una noche preso en una comisaría.

El ahora presidente electo alcanzó la secretaría general del sector mayoritario del coloradismo en 1980, ante la proscripción del líder de su grupo, la lista 15 "Unidad y Reforma". Jorge Batlle "Jorgito", como se le conoce en Uruguay, es sobrino nieto de uno de los creadores del Uruguay moderno, José Batlle Ordóñez e hijo del también expresidente Luis Batlle Berres. Cobró notoriedad en 1968 cuando se benefició de una devaluación monetaria mediante una infidencia. En 1966 y 1971 fracasó en la carrera hacia la silla presidencial, en su intento por vender una imagen kennediana a un país de viejos. Entonces, era considerado como un "derechista inteligente", mucho más flexible que Pacheco y Bordaberry. Ante la proscripción de Batlle, Sanguinetti pasó a ser su delfín.

Sanguinetti fue el ministro de Industria de los tres últimos años del gobierno pachequista e integró el primer gabinete de Bordaberry, en 1972, como ministro de Educación. Se le recuerda por ser el autor de una ley fascista sobre la enseñanza, que modificó las leyes orgánicas de primaria, secundaria y la Universidad del Trabajo, eliminando las respectivas autonomías y consagrando normas dirigidas a la persecución ideológica y a la represión de la actividad gremial de estudiantes, profesores y funcionarios. Sanguinetti logró arrancar, entonces, una unanimidad en contra de su proyecto; sólo fue apoyado por su sector (Unidad y

Reforma) y toda la derecha del coloradismo, por los llamados "blancos baratos" dentro del Partido Nacional, por la gran prensa y por las organizaciones fascistas nucleadas en la Juventud Uruguay de Pie y "Azul y Blanco". El exrector de la Universidad, Ing. Maggiolo, ante una comisión de la Cámara de Diputados, comparó el engendro de Sanguinetti con el sistema educacional de la Italia de Mussolini.

Otra "perla" que se le contabiliza a Sanguinetti es haber sido uno de los primeros en votar y aplaudir, en 1972, el Estado de Guerra Interno exigido por las Fuerzas Armadas e impulsado por otro hombre de su agrupación política, el senador Eduardo Paz Aguirre.

Cuando a comienzos de 1984 el *New York Times* difundió la noticia de que Sanguinetti era el candidato del Departamento de Estado, pocos se sorprendieron. Menos, cuando el 17 de julio, el semanario democristiano *Aquí* indicó a Sanguinetti y Tarigo como los candidatos de las multinacionales. Todo Uruguay sabía que en enero de 1980, el hombre que "combatió a la situación de facto" había cenado en la residencia de la embajada de Estados Unidos, en Montevideo, junto con los consejeros de Estado Julio César Espínola, Viana Reyes y Eduardo Carrera Hughes y el excanciller de los militares Juan Carlos Blanco. En plena dictadura, Sanguinetti no era un "proscrito" cualquiera; alternaba con la crema y nata "de la situación de facto".

Conocidas son también las conversaciones sostenidas entre el general Rapela y Sanguinetti, previas al "diálogo" Fuerzas Armadas-partidos tolerados, y su viaje a Estados Unidos en octubre del 83, invitado por el gobierno de Reagan, donde coincidió con el general Angel Barrios, director del Instituto Militar de Estudios Superiores, y el hombre encargado de "negociar" con los partidos permitidos.

En los últimos dos años Sanguinetti fue el principal impulsor de un "gran acuerdo nacional", un nuevo "pacto social". Fue el paladín de la conciliación de clases, que trabajó por la división obrera e intentó desmovilizar y quitar las aristas clasistas y combativas a las expresiones de los trabajadores. Su receta: colaboración, y una disciplina productiva autoimpuesta.

Su compañero de fórmula Enrique Tarigo, exabogado de las patronales periodísticas, no se quedó atrás. A raíz del paro del 18 de enero de 1984, sostuvo desde su semanario *Opinar* que toda

acción de lucha "es una desviación o una provocación". Estas modalidades "tacticistas" del binomio electo coinciden con la tesis "aperturista" que sostienen. Sanguinetti adelantó que habría que pagar "un peaje necesario para retornar a la Constitución del 67". El "peaje" fue el impuesto por los militares en las negociaciones del Club Naval.

Acorde con sus intereses de clase, la actitud antiobrera de Sanguinetti afloró el 7 de diciembre pasado, cuando anunció el propósito de "democratizar" los sindicatos a través de una ley que reordene las organizaciones obreras. Como dijo Sanguinetti en su proclamación, "los sindicatos deberán abandonar su ideología de resistencia". Sabe que en la negociación con los trabajadores tiene una de las pruebas de fuego de su gobierno. Por eso, su objetivo es maniatar al combativo movimiento clasista, mantenerlo desmovilizado.

### Continuismo Estructural

Sanguinetti es el hombre de la fracción hegemónica de la burguesía, integrada por los industriales exportadores, los sectores financieros asociados al capital internacional, los nuevos capitalistas de agricultura y de la pesca y los ganaderos ligados a las empresas extranjeras.

El artífice del modelo neoliberal uruguayo, que se corresponde con las necesidades del capitalismo monopolista internacional, es Alejandro Vegh Villegas, que pertenece al mismo sector político de Julio Sanguinetti. Vegh asumió la cartera de Economía en 1974, con los militares, y desde entonces tomó forma la política económica iniciada con Bordaberry, cuyo objetivo era convertir a Uruguay en un gran mercado de capitales extranjeros, con el apoyo represivo y de las Fuerzas Armadas. El desarrollo del modelo, que significó cambios en el bloque en el poder, insumió un decenio, al cabo del cual Vegh fue llamado de vuelta por los militares para preparar la transición. Neto representante del nuevo sector hegemónico, es el nexo con la burguesía industrial y agraria expresada en los partidos tradicionales.

Su línea privatizante y desestabilizadora fue elogiada por su jefe político, Jorge Batlle. "Si Uruguay tiene un hombre de talento y capacidad como Vegh Villegas para manejar el Banco Central, cualquier gobierno lo puede utilizar en beneficio del país", dijo Batlle. ¿Simple adelanto de lo que vendrá? Al parecer, Vegh no estará en el nuevo gabinete. Pero sí sus hombres. Se trata de dar continuidad al modelo.

A la caída del aparato productivo -gracias a la política de los *Chicago Boys* y del FMI instrumentada por Vegh-, Uruguay enfrenta hoy la otra modalidad del estrangulamiento financiero: la deuda externa, que Vegh ubica en 5 mil 100 millones de dólares. Ahí tiene Sanguinetti su otro talón de Aquiles. En mayo de 1985, dos meses después de asumir el gobierno civil, está prevista la visita de los emisarios del FMI y la renegociación con los bancos extranjeros. Uruguay deberá pagar el año entrante más de 750 millones de dólares a sus acreedores extranjeros, de los cuales 400 son intereses y 350 amortizaciones de la deuda.

La fórmula acuñada por Sanguinetti es un "gobierno de unidad nacional", con el cual pretende mediatizar a la oposición parlamentaria -blancos y frenteamplistas-, y "control" obrero. Ello, porque no tiene propuestas sustancialmente diferentes a las que han estado en aplicación. Y no puede tenerlas, porque significa el continuismo. Sanguinetti era el caballo del comisario, que en la expresión vernácula sureña es asimilable a los militares; pero también, el candidato del bloque económico en el poder. ■